

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Ref. ACCION DE TUTELA RAD. 2023-00112

Accionante: FLAVIO ENRRIQUE MENA ASPRILLA

Accionada: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Procede el despacho a resolver la Acción de Tutela impetrada por el ciudadano **RAMON ENRIQUE MAESTRE SAURITH** en contra del **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS**, estando dentro del término legal para ello y habiéndose surtido todas las etapas que este trámite constitucional impone.

ANTECEDENTES:

Que el señor **FLAVIO ENRRIQUE MENA ASPRILLA** es adulto mayor de setenta y seis (76) años de edad y actualmente es beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR, por medio del cual recibe un subsidio económico equivalente a \$80.000 mensuales.

Que al acercarse a consultar el estado de su próximo pago-Giro, se le informa que fue suspendido por causal "percibir una renta"

Señala que presento derecho de petición manifestando lo siguiente:

"Por mi avanzada edad no me encuentro en condiciones físicas para trabajar. → Aunque mi hijo me tenga afiliado en calidad de beneficiario al régimen contributivo en salud, esto no significa que yo perciba una renta. → Aunque mi hijo me tenga afiliado en calidad de beneficiario al régimen contributivo en salud, esto no significa que yo reciba de él los medios necesarios para satisfacer mis necesidades básicas. → Con el pago del subsidio de COLOMBIA MAYOR cubro mis necesidades básicas → Hace más de veinte (20) años fui operado de glaucoma. → Desde hace más de veinte (20) años obligatoriamente debo acudir a mis citas con mi médico tratante. → Es necesario-indispensable que mi hijo me tenga afiliado en calidad de beneficiario al régimen contributivo en salud, para garantizar mi asistencia periódica al control con mi médico tratante, quien debe hacer seguimiento a la patología de glaucoma. → La protección de mis derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas por ser beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR es un paso para la protección de los demás derechos. → La desprotección de mis derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas por la suspensión como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR, consecuentemente conlleva a la desprotección de mis demás derechos, especialmente a la salud, a la seguridad social y a la vida. → El subsidio que me estaba siendo otorgado por parte del Programa COLOMBIA MAYOR, constituía un ingreso seguro con el cual podía satisfacer mi congrua subsistencia y una vida en condiciones dignas. → La suspensión como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR puede causar afectaciones en mi calidad de vida.

PETICIÓN PRINCIPAL: Respetados señores, requiero, que una vez se realice un estudio detallado de mi caso, procedan a ordenar al funcionario competente en el programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL que, dentro del término legal, lleve a cabo todas las diligencias administrativas necesarias para: 1.1. Dejar sin efectos la decisión administrativa que ordenó suspender a RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL. 1.2. Reactivar a RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL. 1.3. Ordenar el pago de los giros que estén pendientes por pagar a favor de RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL.

PETICIÓN SUBSIDIARIA: En el evento de no acceder a la Petición Principal, solicito, informarme DETALLADAMENTE el por qué no se accedió a tal solicitud, allegando con dicha respuesta el soporte documental autentico que argumenta y prueba los motivos de la negación, ya que inmediatamente estudiaré las posibles alternativas jurídicas para la solución de mi situación."

Considera, que la reactivación o reingreso como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR administrado por PROSPERIDAD SOCIAL, no puede ser sometido a las determinaciones y dilaciones subjetivas que imponga la COLOMBIA MAYOR, sino que por el contrario, por ser un sujeto de atención pronta y adecuada, debe ser garantista, evitando que el incumplimiento de los deberes legales y constitucionales por parte de COLOMBIA MAYOR sigan teniendo en inminente riesgo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital. Por lo anterior, solicita que se proteja el derecho de petición, en consecuencia, se le ordene a la entidad accionada contestar de fondo la petición.

Es así como el accionante solicita las siguientes:

PETICIONES

"1. Señor Juez, ruego, que una vez se realice un estudio detallado de mi caso, se AMPAREN mis derechos al debido proceso, al mínimo vital y otros derechos constitucionales fundamentales que actualmente se me puedan estar lacerando.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito, ORDENAR al programa COLOMBIA MAYOR administrado por PROSPERIDAD SOCIAL, por conducto de su representante legal o de quien haga sus veces, que en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo que usted proferirá, si no lo ha hecho, proceda a realizar las siguientes actuaciones administrativas: →

Dejar sin efectos la decisión administrativa que ordenó suspender a RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL.

→ Reactivar a RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL.

→ Ordenar el pago de los giros que estén pendientes por pagar a favor de RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL.

→ Ordenar el pago de los giros que desde la suspensión se dejaron de pagar a favor de RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.170.414, expedida en Villanueva - La Guajira, como beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR - PROSPERIDAD SOCIAL."

ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de Tutela fue admitida mediante auto de fecha 24 de febrero de 2021, ordenando a la entidad accionada dar contestación.

En el término del traslado la accionada contestó así:

DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS, Manifiesta en su respuesta que, el señor RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURIT, identificado con C.C. No 5.170.414, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social a fin

de que se le amparen los derechos fundamentales al mínimo vital y debido proceso, con el argumento de que el programa Colombia Mayor, lo suspendió del programa bajo la causal "PERCIBIR UNA RENTA", ya que su hijo lo tiene afiliado en calidad de beneficiario al régimen contributivo en salud, situación violatoria de sus derechos fundamentales en la medida de que, por su avanzada edad, no puede trabajar; alega que radicó derecho de petición ante la entidad solicitando dejar sin efectos la decisión administrativa que ordenó suspenderlo del programa, reactivarlo nuevamente en el mismo y el pago de los giros no cancelados con ocasión de la suspensión decretada.

Señala que en razón a la manifestación de la parte accionante de haber radicado un derecho de petición a la entidad solicitando dejar sin efectos la decisión administrativa que ordenó suspenderlo del programa, reactivarlo nuevamente en el programa y disponer el pago de los giros no cancelados con ocasión de la suspensión decretada (**y del cual no adjuntó prueba alguna**), se realizó consulta en la plataforma de gestión documental de la entidad, donde se tramitan todas las peticiones de la ciudadanía, denominada DELTA, con los datos de identificación del señor RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURIT C.C. N° 5.170.414, no encontrándose registro alguno sobre peticiones radicadas a su nombre, así como tampoco remisión por competencia de otra entidad.

Asegura que, con base en lo anterior, queda desvirtuada la afirmación de la parte accionante de que radicó ANTE PROSPERIDAD SOCIAL, DERECHO DE PETICIÓN, del cual se reitera no acredita ninguna prueba y tampoco existe registro en la plataforma, por tanto esta entidad no ha vulnerado, ni el derecho de petición, ni ninguno de los derechos fundamentales invocados.

CONSIDERACIONES:

La acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Dado que en este proceso se reclama la contestación del derecho de petición, el Despacho estima pertinente advertir sobre la protección el derecho fundamental de petición, que ésta comprende los siguientes elementos de acuerdo a lo expuesto por el máximo tribunal constitucional en sentencia T – 667 de 2011, los cuales se exponen a continuación:

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que obliga a la autoridad a quien se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guarden relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.

(4) Y, el derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta”.

Igualmente, la H. Corte Constitucional en sentencia T-206 de 2018 adoctrinó que la “Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y **tener notificación efectiva**” (negrilla y subrayado propio).

Sobre la notificación de la respuesta del derecho de petición la H. Corte Constitucional en Sentencia T-430 de 2017, expuso lo siguiente:

La notificación del peticionario implica la obligación de las autoridades y de los particulares de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo de su solicitud. En efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta, puede considerarse que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la obligación de informar de manera cierta al interesado sobre la decisión, para que éste pueda ejercer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé en algunos casos o, en su defecto, demandarla ante la jurisdicción competente. En ese sentido, esta Corte en la sentencia C-951 de 2014 indicó que: “el ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición^[56], porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente. La notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011” Negrilla y subrayado fuera del texto.

ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de

las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada". Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, "pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución"

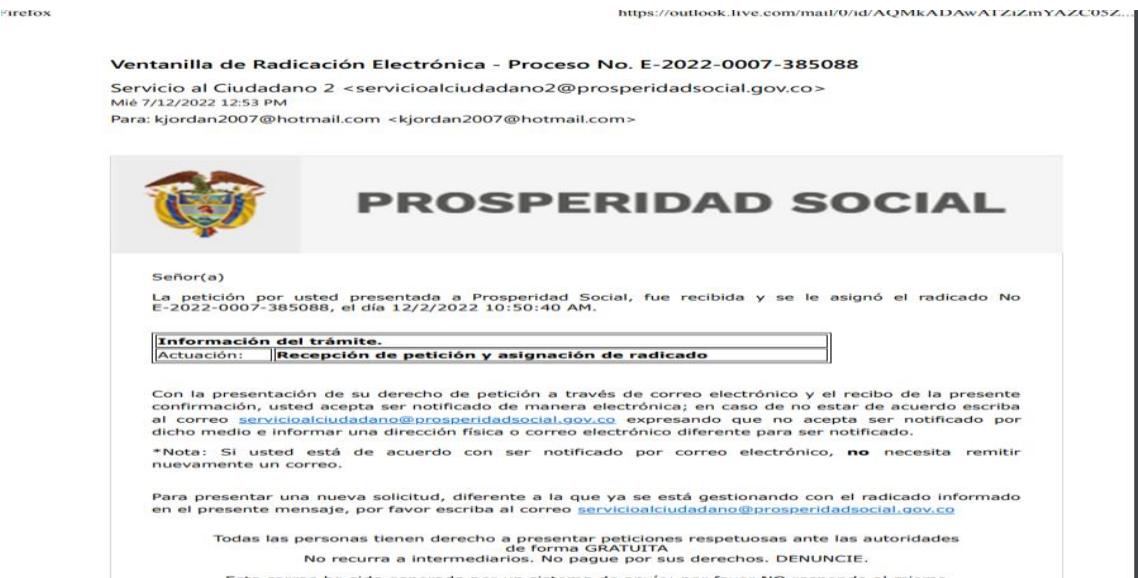
A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: "(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)".

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

CASO EN CONCRETO

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si el **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS** vulneró los derechos fundamentales de petición debido proceso y mínimo vital del señor **RAMON ENRIQUE MAESTRE SAURITH** respecto de la solicitud que radicó el 02 de diciembre de 2022.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente el comprobante del radicado de la solicitud presentada por el accionante ante el **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS** de fecha 07 de diciembre de 2022, prueba que demuestra que el accionante si presentó el derecho de petición objeto de la presente acción, como se ve a continuación:



5.3.- En efecto, se puede ver que, en el asunto bajo estudio, la parte actora acudió a la acción de tutela por considerar que el **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS** está vulnerando su derecho de petición, al no dar respuesta a la solicitud presentada el 02 de diciembre de 2022.

Sobre el particular, la entidad accionada se limitó a indicar que la presentación de la acción constitucional resulta improcedente toda vez que se realizó consulta en la plataforma de gestión documental de la entidad, donde se tramitan todas las peticiones de la ciudadanía, denominada DELTA, con los datos de identificación del señor RAMÓN ENRIQUE MAESTRE SAURIT C.C. N° 5.170.414, no encontrándose registro alguno sobre peticiones radicadas a su nombre, así como tampoco remisión por competencia de otra entidad.

Sin embargo, contrario a lo señalado por la entidad accionada, el aquí demandante logró acreditar que, si había radicado la petición tal y como se indicó líneas arriba, petición que a la fecha no ha sido tramitada, por lo que, resulta palmario concluir que la entidad demandada conculcó el derecho de petición del señor **RAMON ENRIQUE MAESTRE SAURITH**, al no allegar el DPS constancias de que se hubiese remitido respuesta de la petición presentada el 02 de diciembre de 2022.

En consecuencia, se ordenará al **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS** que, en el término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con el escrito presentado por el accionante el 02 de diciembre de 2022, o en su defecto acredite las constancias de remisión de lo solicitado al accionante.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela impetrada por **RAMON ENRIQUE MAESTRE SAURITH** en contra del **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS**, por los argumentos esbozados en la parte considerativa.

SEGUNDO: ORDENAR al **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL- DPS** que, dentro del término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con el escrito presentado por los accionantes el 19 de octubre de 2022.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

CUARTO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE.



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

AP